



# Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Distr. general  
20 de marzo de 2017  
Español  
Original: inglés

---

## Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 83<sup>er</sup> período de sesiones

### Acta resumida de la 2236<sup>a</sup> sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 13 de agosto de 2013, a las 10.00 horas

*Presidente:* Sr. Avtonomov

## Sumario

Reunión oficiosa con organizaciones no gubernamentales

*Diálogo con organizaciones no gubernamentales chilenas*

---

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.5108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.13-56434 (S) 141116 200317



\* 1 3 5 6 4 3 4 \*

Se ruega reciclar



*Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.*

### **Reunión oficiosa con organizaciones no gubernamentales**

#### *Diálogo con organizaciones no gubernamentales chilenas*

1. **El Sr. Correa Calfin** (Red de Pueblos Originarios en Chile por los Derechos de la Madre Tierra, la Biodiversidad y el Conocimiento Tradicional) dice que el Estado parte hace caso omiso de los derechos civiles, políticos y sociales de los pueblos indígenas que su organización representa. En ese contexto, es urgente aclarar la relación entre la Constitución de Chile y los instrumentos internacionales que el país ha suscrito. La falta de reconocimiento en Chile de la condición de pueblo indígena constituye un obstáculo para el goce de sus derechos, en particular con respecto a los recursos naturales ubicados en sus tierras. No obstante, la Ley Antiterrorista, que ha sido criticada por un relator especial de las Naciones Unidas, se sigue aplicando en formas que a menudo propician la discriminación contra los pueblos indígenas.

2. **El Sr. Muñoz** (International Network of Human Rights) dice que se ha hecho poco para educar a las comunidades mapuches sobre los mecanismos internacionales e interamericanos de derechos humanos o para que les sea más fácil recurrir a ellos. El Estado parte debería facilitar el acceso de las comunidades indígenas a los medios de comunicación, en particular la radio e Internet, para que puedan obtener información más fácilmente sobre la salvaguardia de sus derechos humanos, entre otras cosas, y evitar que sus lenguas desaparezcan. Además, es necesario luchar contra la estigmatización de los pueblos indígenas, en especial los mapuches, por parte de los medios de comunicación no indígenas, que a veces promueven el discurso de odio racial.

3. En lo que respecta a la cuestión de las tierras, el Sr. Muñoz señala que las actividades de las empresas forestales afectan gravemente a los recursos hídricos utilizados por el pueblo mapuche. El Gobierno debe ir más allá de consideraciones económicas a corto plazo al sancionar las actividades de esas empresas.

4. **La Sra. Manquepillan** (Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Oficina de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) en América Latina y el Caribe, International Network of Human Rights) dice que tuvo dificultades para obtener una licencia cuando quiso crear una emisora de radio para oyentes mapuches en 2011. Como es ilegal emitir sin licencia, el Gobierno ha emprendido acciones judiciales contra su emisora. Muchas otras emisoras mapuches han sido también perseguidas al no haber ningún apoyo oficial a las emisoras de radio indígenas. El hecho de contar con sus propios medios de comunicación ayuda a los pueblos indígenas a promover la cohesión social, preservar sus lenguas, ejercer su libertad de expresión y proteger sus derechos.

5. **La Sra. Sidibé** (International Network of Human Rights) dice que las emisoras de radio indígenas son esenciales al permitir a los miembros de las comunidades en cuestión intercambiar información, dialogar y participar más plenamente en la vida cívica. También ayudan a pueblos como el mapuche, cuyas comunidades se encuentran dispersas geográficamente, a mantener una cohesión social. Además, las emisoras locales promueven la preservación y el aprendizaje de las lenguas indígenas. La Sra. Sidibé señala que la producción y difusión de programas radiofónicos culturales resulta costosa, en particular los programas bilingües, y que es necesario que haya más apoyo del Gobierno y que las emisoras mapuches puedan emitir publicidad pagada para ayudarlas a tener más independencia financiera.

6. **La Sra. Meraz Sepúlveda** (Observatorio Ciudadano y Corporación Humanas), hablando primero en nombre del Observatorio Ciudadano, dice que la continua discriminación racial en Chile afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas. A pesar de las disposiciones del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) y de la Ley Antidiscriminación promulgada en 2012, la Constitución de Chile no reconoce aún la existencia de pueblos indígenas y el Senado ha rechazado una propuesta presentada en 2009 para rectificar la situación. El hecho de que no se incorporen las normas internacionales en la legislación

nacional contribuye a crear un clima de inseguridad jurídica que perpetúa la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

7. Otro importante motivo de preocupación es la proliferación de proyectos de extracción, de infraestructura y de desarrollo aprobados por el Gobierno sin consultar a los pueblos indígenas, obtener su consentimiento o permitirles participar en los beneficios que reportan. También preocupa que no se restituyan aún a los pueblos indígenas sus tierras ancestrales.

8. La organización que representa recomienda que se consagren en la Constitución el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, enumerados en el Convenio núm. 169 de la OIT; que se revise la política que afecta a las tierras habitadas por pueblos indígenas; que se asignen más fondos para la política encaminada a mejorar la situación de los pueblos indígenas; que se investiguen las denuncias de violencia contra los pueblos indígenas por parte del ejército y la policía, se procese a los autores y se indemnice adecuadamente a las víctimas; que se examine la legislación antiterrorista para que solo se aplique en los casos de terrorismo y que se proteja adecuadamente el derecho a las debidas garantías procesales.

9. Hablando en nombre de la Corporación Humanas, la oradora señala que las mujeres indígenas migrantes o afrodescendientes sufren una discriminación particular en Chile y que no existe ningún mecanismo nacional eficaz para protegerlas de ella. Se necesita una política eficaz para hacer frente a problemas como la protección insuficiente de las víctimas de la trata, el trato inadecuado dado a las mujeres indígenas por los agentes de policía y la no concesión de la ciudadanía a los hijos de migrantes en situación irregular.

10. **El Sr. Murillo Martínez**, observando que, según los oradores que le han precedido, la Constitución de Chile no reconoce a los pueblos indígenas como tales, pide que se confirme que, en efecto, los principios contenidos en el Convenio núm. 169 no están consagrados en la Constitución.

11. **El Sr. Thornberry** pide más información sobre la cuestión de la desaparición de las lenguas. En cuanto al acoso de los grupos indígenas por los medios de comunicación, solicita ejemplos del tipo de lenguaje utilizado y pregunta si Chile cuenta con un marco jurídico para hacer frente al discurso de odio racista y si existe un código deontológico para orientar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación sobre la cobertura de las cuestiones relacionadas con la diversidad cultural.

12. **El Sr. de Gouttes** (Relator para el país) pregunta cuál ha sido la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) representadas en la reunión en la preparación del informe del Estado parte y qué tipo de cooperación existe entre esas organizaciones y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Solicita que se evalúe la labor de la Defensoría Penal Pública. Observando que no ha habido ninguna declaración en nombre de los pueblos afrodescendientes o romaníes y que estos últimos no se mencionan en el informe del Estado parte, pide información sobre el trato de que son objeto ambos grupos.

13. **El Sr. Vázquez** pide información adicional sobre la afirmación de que la Constitución de Chile da prioridad a otros derechos humanos sobre la no discriminación. Sería útil saber si se prohíbe el uso de la lengua mapuche en las escuelas, así como el uso de la lengua rapanui en los procedimientos penales. Sería interesante saber si las autoridades han estudiado la posibilidad de crear un sistema de justicia indígena aplicable al pueblo rapanui. El orador pregunta si el Gobierno ha mantenido el compromiso que contrajo en octubre de 2010 de no invocar la Ley Antiterrorista en procesos contra miembros de la comunidad mapuche y, de no ser así, si ha dado alguna explicación al respecto.

14. **El Sr. Kemal** pregunta si la tipificación de los actos delictivos cometidos por miembros de comunidades indígenas como delitos comunes y no como actos terroristas ha tenido un efecto positivo. También sería útil saber si se están tomando medidas especiales para mejorar la situación de las mujeres indígenas en el Estado parte. Pregunta si sufren discriminación dentro de sus comunidades o por parte del Estado y la sociedad en general y qué forma reviste esa discriminación.

15. **El Sr. Lindgren Alves** pregunta cuando comenzó a utilizarse en el Estado parte la palabra “mapuche” casi como sinónimo del término “terrorista” y por qué parece referirse únicamente a la comunidad mapuche.

16. **El Sr. Calí Tzay** pregunta por qué la prensa chilena califica a menudo los territorios mapuches de “zonas rojas”. Agradecería que se aclararan las informaciones según las cuales la policía con frecuencia hace un uso desproporcionado de la fuerza contra el pueblo mapuche durante los allanamientos a las comunidades, ejerciendo violencia contra personas desarmadas y robando sus bienes. El Comité desearía recibir información actualizada sobre el seguimiento de la recomendación que formuló en 2009 de que se tomaran medidas inmediatas para resolver el problema de los basurales que fueron instalados en las comunidades mapuche sin su consentimiento previo (CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 23).

17. **La Sra. January-Bardill** solicita información adicional sobre los efectos en el Estado parte del racismo ambiental en la salud, especialmente de las mujeres y los niños. Sería útil saber si existe algún proceso judicial o administrativo para restituir tierras a los pueblos indígenas. Se pregunta si los únicos problemas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) son financieros o si tiene otros problemas.

18. **La Sra. Crickley** dice que el Comité agradecería recibir propuestas de las ONG sobre la forma en que los pueblos indígenas pueden participar de manera efectiva en la elaboración de programas y leyes que los afectan en el Estado parte. También sería útil escuchar sugerencias sobre la forma de promover el conocimiento del sistema de derechos humanos en las comunidades indígenas. Solicita información adicional sobre la cuestión de la trata de mujeres de comunidades minoritarias. Habida cuenta de la importancia de contar con datos para formular una política de apoyo a los pueblos indígenas y las minorías, pregunta si hay en el Estado parte datos de fácil consulta sobre esos grupos.

19. **La Sra. Manquepillan** (Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Oficina de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) en América Latina y el Caribe, International Network of Human Rights) dice que la Defensoría Penal Pública es un servicio general. No existe ninguna defensoría pública específica para las comunidades indígenas y el pueblo mapuche que aplique el Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) y la Ley Indígena. Si bien la lengua mapuche, el mapudungun, no está prohibida en las escuelas, solo se enseña en las escuelas ubicadas en territorio mapuche los cuatro primeros años de educación primaria, dos horas a la semana. Esto es claramente insuficiente para promover el idioma. Las mujeres mapuches solo pueden obtener educación primaria y no encuentran un trabajo digno. Las que migran a las zonas urbanas se dedican al servicio doméstico al no tener formación para realizar ningún otro trabajo. No hay mujeres mapuches en la política chilena, ni siquiera a nivel municipal. El Gobierno debería adoptar medidas para remediar esa situación, entre otras cosas mediante la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer.

20. **La Sra. Meraz Sepúlveda** (Observatorio Ciudadano y Corporación Humanas) dice que, según el informe sobre la visita de la Organización Mundial Contra la Tortura a Chile en agosto de 2013, se sigue aplicando la Ley Antiterrorista a los miembros de la comunidad mapuche. Hay cuatro causas pendientes contra 26 personas acusadas de actos terroristas, una de las cuales se encuentra en prisión preventiva. El nuevo fiscal regional de La Araucanía, una región con muchas comunidades mapuches, indicó recientemente que no dudaría en invocar la Ley Antiterrorista si miembros de la comunidad mapuche cometían actos similares a aquellos a los que la Ley se había aplicado en el pasado. Resulta por tanto evidente que el Gobierno no está respetando su compromiso de no invocar la ley en esas circunstancias, lo que da lugar a un trato arbitrario y discriminatorio de esa comunidad. La aplicación de la Ley contra esa comunidad refuerza la estigmatización del pueblo mapuche como terroristas.

21. Los miembros de la comunidad mapuche han denunciado casos de registros en que han participado hasta 100 policías armados ejerciendo violencia tanto contra las personas detenidas como contra todos sus familiares, incluidas las mujeres y los ancianos. La policía también ha robado dinero y destruido instrumentos musicales y otros bienes. Si bien las autoridades están adoptando medidas para capacitar a los carabineros en materia de

derechos humanos, persisten esos casos. Dado que los carabineros que ejercen funciones policiales están sometidos a la jurisdicción militar, los civiles que desean presentar una denuncia contra ellos tienen que acudir a los tribunales militares. Esos juicios no son transparentes y no respetan las debidas garantías procesales, lo que puede dar lugar a impunidad.

22. **El Sr. Muñoz** (International Network of Human Rights) dice que, según tiene entendido, ninguna comunidad indígena ha participado en la preparación de los informes periódicos 19º a 21º. Los territorios mapuches son calificados a menudo de “zonas rojas” y los miembros de la comunidad mapuche son descritos como terroristas debido a las numerosas campañas que han llevado a cabo para recuperar sus tierras y territorios ancestrales. Han ocupado tierras cultivadas por sus propietarios actuales y, cuando los carabineros han tratado de desalojarlos, se han producido violentos enfrentamientos. A menudo se califica al pueblo mapuche de terroristas en los medios de comunicación locales, e incluso en algunos medios nacionales. No es casualidad que muchos medios de comunicación sean propiedad de los hacendados que compraron las tierras ancestrales mapuches. Gran parte de las fronteras de los territorios mapuches están fuertemente controladas por miembros de las fuerzas armadas. La comunidad mapuche ha luchado durante muchos años por recuperar sus tierras y en algunos casos el Gobierno ha vuelto a comprar tierras a agricultores para entregarlas a los mapuches. Se sigue invocando la Ley Antiterrorista contra los miembros de la comunidad mapuche.

23. El principal obstáculo que afrontan las ONG que trabajan para aumentar la participación política de las comunidades indígenas consiste en que, como Chile se considera un país rico, se recibe desde el exterior muy poca asistencia para el desarrollo destinada a dar a conocer los derechos humanos. Es preciso capacitar a los dirigentes comunitarios para que se denuncien casos individuales ante los órganos internacionales de derechos humanos.

24. **El Sr. Correa Calfin** (Red de Pueblos Originarios en Chile por los derechos de la Madre Tierra, la Biodiversidad y el Conocimiento Tradicional) dice que, si bien el artículo 5, párrafo 2, de la Constitución establece que los instrumentos internacionales tienen rango constitucional, el Gobierno ha indicado que el Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales se considera de rango inferior a la Constitución. Los pueblos indígenas no están reconocidos en la Constitución, lo que afecta a todos sus derechos humanos. Cuando ha habido conflictos violentos en el país, a menudo los altos funcionarios han hecho declaraciones a la prensa culpando a los mapuches antes de que se llevara a cabo una investigación. Muchos relatores especiales de las Naciones Unidas han visitado Chile y formulado recomendaciones, en particular sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista. El Gobierno rara vez las pone en práctica. Hay una clara necesidad de promover la creación de medios de comunicación indígenas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos no cuenta con ningún indígena entre su personal y carece de un departamento específico para asuntos indígenas. Si bien hay una Defensoría Penal Pública Mapuche en la IX Región, esta cuenta con pocos indígenas entre su personal y carece de recursos humanos y financieros. No se reconoce en Chile ningún sistema de justicia indígena. La comunidad romaní del país sufre una discriminación considerable, pero se ha hecho poco por afrontar ese problema.

25. Si bien desde 2009 las escuelas primarias con al menos un 40% de alumnos indígenas están obligadas por ley a enseñar la lengua indígena correspondiente, las lenguas indígenas del país deberían enseñarse en los establecimientos de enseñanza primaria, secundaria y terciaria a fin de crear conciencia de la diversidad cultural del país. Las becas concedidas a alumnos indígenas son insuficientes para que puedan realizar estudios universitarios. Es preciso destinar más recursos a la educación en las comunidades indígenas y aumentar su participación en la elaboración de los planes de estudios.

26. El pueblo rapanui en la Isla de Pascua no tiene suficiente acceso a servicios básicos como el sistema de justicia y la atención de la salud. No existen medidas alternativas a la privación de libertad y hay que hacer un largo viaje a la parte continental del país para acudir a un hospital. Se debe ejercer un control más estricto sobre la migración a la isla para evitar la introducción de enfermedades por parte de los visitantes y reducir la cantidad de desechos que se dejan. No existe política alguna para proteger el territorio de la isla y su estilo de vida tradicional.

27. La Ley Antiterrorista, criticada por el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, se está utilizando injustamente contra el pueblo mapuche. Desde el final de la dictadura en Chile, cuando el pueblo mapuche comenzó a reivindicar sus derechos, han sido catalogados como terroristas y han sufrido violencia institucionalizada. La policía no ha recibido formación para comprender la cultura y la sociedad mapuches, que están siendo destruidas por ignorancia. Las mujeres, los ancianos y los niños están expuestos a abusos policiales.

28. También se impide a los pueblos indígenas mantener sus prácticas de medicina tradicional, incluidos sus métodos tradicionales de alumbramiento. El acceso de las mujeres a la educación se ve obstaculizado por la falta de programas que promuevan la educación de las niñas y su capacitación como dirigentes. La participación de los pueblos indígenas en la vida política chilena es limitada debido a la inexistencia de una organización que represente sus intereses de manera efectiva. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es obsoleta y no representa a los pueblos indígenas, ya que la mitad de sus miembros son funcionarios públicos y su director es nombrado por el Presidente de Chile.

29. Sigue habiendo terrorismo ambiental en Chile. Se han denunciado casos de contaminación de las aguas subterráneas provocados por el vertido industrial de desechos tóxicos en zonas pobladas por comunidades indígenas, como Collipulli. La comunidad local ha denunciado ante las autoridades ejecutivas y judiciales la elevada tasa de malformaciones y enfermedades en la zona a causa de estos vertidos. La política gubernamental no prevé la consulta de las comunidades locales ni su participación en la lucha contra el terrorismo ambiental. Los poderes ejecutivo y judicial siguen haciendo reformas legislativas que propician prácticas perjudiciales para los pueblos indígenas. El acceso a agua potable y a tierras no contaminadas y el desalojo de las grandes empresas que provocan su desplazamiento son esenciales para la supervivencia de esas comunidades.

30. El Estado parte está adoptando medidas para reconocer el derecho a la tierra, pero son insuficientes. Muchas familias indígenas han sido desposeídas de sus tierras y obligadas a trasladarse a ciudades, pero aún no se han tomado disposiciones respecto del 60% de la población indígena que vive actualmente en las ciudades y no reúne los requisitos para reclamar la restitución de sus tierras; hay que darles la posibilidad de regresar a sus tierras ancestrales. Asimismo, habría que formular un plan a fin de facilitar la compra de tierras por el Gobierno para las comunidades indígenas.

31. La consulta y la participación de las comunidades indígenas en la formulación de la política pública no se ajustan a las normas internacionales, como han señalado los relatores especiales, y no se ha levantado un censo de la población indígena. Los pueblos indígenas del país siguen sufriendo marginación y viviendo en la pobreza y el Sr. Correa Calfin insta a las organizaciones internacionales y los organismos de cooperación a que vigilen su situación más de cerca.

32. **El Sr. Vázquez** señala que el Estado parte ha rechazado las conclusiones del informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y pregunta si ha respondido a las decisiones publicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2013 sobre la definición de terrorismo de en Ley Antiterrorista. También se pregunta si el Gobierno ha justificado por qué se sigue aplicación la Ley Antiterrorista contra la comunidad mapuche. Dado que los tribunales suelen sobreseer las causas cuando el poder ejecutivo invoca la Ley contra los mapuches, ¿se trata únicamente de un problema del poder ejecutivo y no del poder judicial? Asimismo, ¿existe un mecanismo que permita a los tribunales ordenar al poder ejecutivo que se abstenga de invocar la Ley?

33. **El Sr. Calí Tzay** pregunta a los representantes de la comunidad mapuche cómo se identifican. ¿Se autodenominan pueblos indígenas, pueblos nativos, minorías étnicas o grupos étnicos?

34. **El Sr. de Gouttes** dice que en el informe del Estado parte se señala que se ha modificado la Ley Antiterrorista para eliminar la presunción de la intención terrorista, reducir las penas y proteger a los menores. También se afirma que los tribunales aplican la Ley de manera imparcial. En cambio, el Relator Especial sobre la promoción y protección

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha pedido recientemente al Estado que no aplique la Ley Antiterrorista en el contexto de las reivindicaciones sociales y territoriales de la comunidad mapuche. Al parecer, el problema radica en la definición de “acto terrorista” y es preciso someter a las autoridades judiciales la cuestión de la interpretación de la Ley Antiterrorista y sus posteriores enmiendas.

35. **El Sr. Amir**, refiriéndose a la situación de la minoría mapuche con respecto a los problemas relacionados con las tierras, pregunta si en la actualidad las tierras están ocupadas por personas no pertenecientes a la comunidad mapuche, si esa ocupación es oficial y cuál es la situación de los mapuches en la cadena de producción agrícola.

36. **El Presidente** pregunta por qué no se ha presentado nunca una comunicación individual al Comité, en particular habida cuenta de que Chile es uno de los pocos países de América Latina que ha reconocido la competencia del Comité para examinar denuncias individuales.

37. **El Sr. Muñoz** (International Network of Human Rights) dice que los problemas que plantea la Ley Antiterrorista se derivan del hecho de que la Constitución se remonta a la época de la dictadura y de que en Chile predomina la creencia de que todo acto de violencia es un acto terrorista. Confirma que la Ley Antiterrorista se sigue aplicando plenamente. Los representantes de la comunidad mapuche no conocen suficientemente el sistema de órganos de tratados ni los procedimientos vigentes para la presentación de denuncias. Muchas de las comunidades mapuches que han sufrido violaciones de los derechos humanos se encuentran geográficamente aisladas y sin acceso a Internet.

38. **La Sra. Manquepillan** (Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Oficina de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) en América Latina y el Caribe, International Network of Human Rights) dice que por pueblos “indígenas” o “nativos” se entienden los diferentes grupos que viven en territorios mapuches, y que el pueblo mapuche tiende a autodenominarse “nación mapuche”. En lo que respecta al problema de las tierras, el pueblo mapuche vive en un estado de asilo en sus propias tierras, que están ocupadas por no mapuches. Ello, sumado a las limitaciones del sistema de producción agrícola, obliga a los mapuches a emigrar a las ciudades para buscar trabajo y obtener educación y atención de salud. También causa la separación de las familias, algo particularmente problemático ya que la familia es un valor fundamental de la cultura mapuche.

39. **La Sra. Meraz Sepúlveda** (Observatorio Ciudadano y Corporación Humanas) señala que la aplicación de la Ley Antiterrorista es parte de un problema más amplio, el de la criminalización de las reivindicaciones del pueblo mapuche de su derecho a la restitución de sus tierras y otros derechos. Para justificar su aplicación, las autoridades aducen que la proporción de causas incoadas en virtud de la Ley Antiterrorista es muy bajo y que no todas son contra el pueblo mapuche. Sin embargo, los criterios que rigen su aplicación son arbitrarios.

40. **El Sr. Correa Calfin** (Red de los Pueblos Originarios en Chile por los Derechos de la Madre Tierra, la Biodiversidad y el Conocimiento Tradicional) dice que hay pueblos indígenas que siguen viviendo en su territorio, aunque muchos han sido desplazados de sus tierras de forma violenta. Ya no se aplican medidas para restringir el uso de las lenguas tradicionales y se permite a las comunidades indígenas utilizar sistemas de justicia tradicionales, concediéndoles cierto grado de autonomía territorial.

41. El Estado no reconoce los sistemas de justicia tradicional y los pueblos indígenas a menudo recurren a sistemas de justicia locales —que ofrecen alternativas a la privación de libertad— en lugar del sistema judicial del Estado. Las comunidades locales suelen mantener en secreto el uso de sistemas de justicia tradicionales porque sus decisiones no serían reconocidas por las autoridades del Estado.

42. El Sr. Correa Calfin señala que el término “mapuche” significa “gente de la tierra” y destaca que tradicionalmente el pueblo mapuche está espiritualmente vinculado a su tierra. La confiscación de sus tierras y de otros recursos naturales por grandes empresas con fines industriales es percibida por el pueblo mapuche como una contaminación de la tierra. Los recursos tradicionales, incluidos los medicamentos, forman parte esencial de la cultura

mapuche, pero no existen programas que permitan su intercambio con miembros de las mismas comunidades en la vecina Argentina, por ejemplo, que suele acabar con la incautación de dichos productos por parte de las autoridades aduaneras. Muchas personas no indígenas tienen interés en la cultura indígena tradicional y acuden a las comunidades locales para ser tratadas con medicamentos tradicionales, pero no existe ningún programa para ayudar a las comunidades a promover ese tipo de intercambio o de turismo.

43. **El Sr. de Gouttes** dice que después de la pausa para el almuerzo se celebrará una reunión oficiosa con las ONG que deseen proseguir el debate.

*Se levanta la sesión a las 13.00 horas.*